

OPERACIÓN LIBERTAD I (2003): “EL PRINCIPIO DEL FIN DE LAS FARC”

CÉSAR ANDRÉS RESTREPO FLÓREZ¹

RESUMEN

La operación Libertad I es un punto de inflexión para el plan estratégico de toma del poder de las FARC. Esta operación militar, desarrollada en 2003, le permitió a las Fuerza Pública fusionar el conocimiento recolectado durante el último lustro en el combate, la aplicación de las transformaciones generadas por lecciones aprendidas y la articulación de capacidades adquiridas a través del Plan Colombia, para expulsar a las estructuras guerrilleras de Cundinamarca y dar inicio a su debilitamiento definitivo en todo el país.

Este artículo describe el contexto histórico de la Operación; recoge los hitos que la anteceden y analiza los factores que negaron el objetivo guerrillero de tomar el control de la capital del país. Hace referencia a las claves de la estrategia, los elementos tácticos y operacionales implementados por la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional para el cumplimiento de esta misión, clave para la supervivencia del Estado.

Finalmente, hace referencia a algunas mejores prácticas y lecciones aprendidas, que fueron factores determinantes para la construcción de la victoria de las Fuerzas Armadas sobre las FARC.

Palabras Clave: Fuerza Aérea Colombiana, Ejército Nacional, Cundinamarca, Bogotá, transformación militar, Plan Colombia, Libertad I, FARC.

¹ Profesional en Gobierno y Relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Magíster en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional de la Universidad de Granada de España. Experto en asuntos de conflicto, seguridad nacional, hemisférica y defensa nacional.

INTRODUCCIÓN

La operación Libertad I, desarrollada a lo largo de 2003, en el departamento de Cundinamarca y en las áreas limítrofes de los departamentos de Boyacá, Meta y Tolima, constituyó la primera fase del Plan Patriota. Con esta operación se frustró el cerco a Bogotá, uno de los dos objetivos estratégicos más relevantes en la campaña guerrillera de toma del poder que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC se habían trazado en la década de 1990 (ESQUIVEL TRIANA, 2016). Esta operación fue de gran importancia, puesto que la recuperación del control de la periferia de Bogotá y el quiebre al cerco que las FARC habían construido por más de 10 años significó un cambio definitivo en la relación de fuerzas entre las Fuerzas Armadas y esta guerrilla en la década venidera.

Sobre la contundencia y relevancia de Libertad I hablan las cifras. De acuerdo con la información entregada por el General del Ejército Reinaldo Castellanos —uno de los responsables del diseño y ejecución de la operación— al final de Libertad I se habían dado de baja 255 guerrilleros, 260 más habían sido capturados y 112 habían desertado. Así mismo, durante la operación se recuperaron 346 fusiles, 66 armas de apoyo, entre morteros y ametralladoras; se incautaron 8.700 kilos de explosivos y se destruyeron 99 campos minados (MARTÍNEZ OSORIO, 2006).

Este capítulo hace una reconstrucción del contexto histórico en el cual se dio la operación; identifica los factores que dieron lugar a su planeación y ejecución; describe la participación de los diferentes componentes de las Fuerzas Armadas-FF.AA. e identifica los elementos cruciales que la hacen —en el concepto del propio Ejército Nacional— una de las cinco operaciones militares más importantes de la historia reciente del país (GÓMEZ NIETO, 2018). El texto cierra presentando algunas de las lecciones aprendidas durante la operación, las cuales en años posteriores serían definitivas para el debilitamiento de la capacidad armada de las FARC.

CONTEXTO HISTÓRICO: LOS DIÁLOGOS DE PAZ Y LA RECUPERACIÓN DEL CAGUÁN

Durante la administración del presidente Andrés Pastrana se adelantaron esfuerzos para lograr una salida negociada al conflicto. El

proceso de diálogo con las FARC comenzó oficialmente el 9 de enero de 1999, en San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá. Este municipio se ubicaba dentro de la zona desmilitarizada acordada con el Gobierno, donde tendría lugar el acantonamiento de frentes guerrilleros encargados de la seguridad de los negociadores de esa organización.

Después de casi cuatro años de conversaciones el proceso de paz no resultó exitoso. Buena parte de los incidentes que lo paralizaron tuvieron que ver con la continuación de acciones violentas por parte de las FARC. Estas acciones tenían como plataforma de planeación y ejecución la zona desmilitarizada-ZD y las áreas contiguas donde, desde tiempo atrás, la guerrilla tenía fuerte presencia territorial y control social y económico de las comunidades.

Antes de julio de 1999 –cuando se activó la zona desmilitarizada de distensión– la ofensiva guerrillera fue masiva (ECHANDÍA & BECHARA, 2006). Esto determinó la ubicación y extensión de dicha zona. Con la activación de la ZD, el Gobierno esperaba una disminución de las acciones guerrilleras y el inicio de un periodo más calmo que ambientara las conversaciones.

No obstante, lejos de ganar en tranquilidad, la ZD se convirtió en el centro de coordinación, comando y control de una campaña ofensiva contra las FF.AA., las instituciones, los sectores productivos y la población civil.

Los frentes acantonados en la ZD desarrollaron centros de entrenamiento donde concentraban un número creciente de combatientes, reclutados voluntaria y forzosamente. La zona también pasó a ser el centro de reclusión de un número importante de personas secuestradas. Estos secuestrados provenían principalmente de los departamentos del centro y oriente del país, siendo Cundinamarca y Bogotá áreas muy afectadas. Así mismo, fue allí donde los ciudadanos que eran extorsionados por estructuras urbanas y frentes con influencia en ciudades o zonas productivas acudían a pagar los “impuestos revolucionarios” (FORERO *ET AL.*, 2017).

De acuerdo con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2013), una de las acciones violentas que afectó la negociación de forma irremediable fue el secuestro y asesinato de tres indigenistas norteamericanos el 9 de marzo de 1999, en el departamento de Arauca. Finalmente, el secuestro del senador Jorge Eduardo Géchem Turbay,

presidente de la Comisión de Paz del Senado, llevado a cabo el 20 de febrero de 2002 por un comando de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, fue el detonante para que el presidente Andrés Pastrana declarara oficialmente rotos los diálogos con esa guerrilla (COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN, 2013). A partir de ese momento comenzó la recuperación de la zona de despeje del Caguán.

La Fuerza Aérea Colombiana-FAC desarrolló la operación Delta-Tora (ESQUIVEL, 2019), que tenía como objetivo abrir los espacios para la retoma terrestre del Caguán y destruir las infraestructuras desarrolladas por las FARC a lo largo de cuatro años en el territorio. Esta operación, vital para el despliegue oportuno de las FF.AA. en el territorio nacional, era de altísima complejidad, toda vez que la zona del Caguán era el lugar de retención de numerosos secuestrados.

La retoma del Caguán, desarrollada un año antes de la operación Libertad I, resultó trascendental para esta última. Por un lado, era la culminación de un trabajo de por lo menos tres años de armonización y coordinación de las capacidades de vigilancia, observación e inteligencia aérea, desarrolladas a partir del mejoramiento en entrenamiento y equipos obtenidos como parte del Plan Colombia (ESQUIVEL, 2019). Por otro, también era muestra de la incorporación efectiva de la asesoría brindada por agencias estadounidenses en el desarrollo de doctrina aplicada para ambientes operacionales caracterizados por alta presencia de población civil (SALAZAR & CRISTANCHO, 2016). Delta-Tora resultó una plataforma para el refinamiento de elementos doctrinales y operacionales necesarios para el desarrollo de operaciones militares con los mayores estándares de protección de población civil y cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario-DIH.

La recuperación del Caguán por parte del Ejército Nacional se desarrolló con la operación Tanatos, que también sirvió de antesala para la estructuración de las capacidades ofensivas de esa institución, usadas en Libertad I y en el Plan Patriota en general. A partir de esta operación el Ejército incrementó en un ciento por ciento las brigadas móviles, consolidó la operatividad de la Fuerza de Despliegue Rápido-FUDRA y creó la Fuerza de Tarea Conjunta Omega-FTCO. Estas últimas serían unidades fundamentales para presionar el repliegue de las FARC a sus

retaguardias y la implementación del Plan Consolidación, implementado desde 2007. Con estas unidades se pudieron ocupar los puntos críticos para bloquear la movilidad guerrillera desde y hacia el Sumapaz, y abrir los espacios requeridos para sostener la ofensiva durante el segundo semestre de 2003, en Cundinamarca (LAS DOS ORILLAS, 2018).

LA DÉCADA DE 1990: LAS FARC ESTABLECEN SU PLAN PARA LA TOMA DE BOGOTÁ

A lo largo de la década de 1990, tanto las FF.AA. como las FARC desarrollaron procesos de transformación e innovación de estrategias, tácticas y capacidades. Definieron planes estratégicos enfocados en la derrota definitiva del enemigo (ÁVILA, 2016). Con el rompimiento de los diálogos de paz, comenzó una carrera contra reloj por la materialización de los objetivos estratégicos que las instituciones legítimas del Estado y las FARC se habían trazado durante la última década (EL NUEVO DÍA, 2013).

El proceso de transformación más temprano fue desarrollado por las FARC. En abril de 1993 el Secretariado y el Estado Mayor Central se reunieron en La Uribe, Meta, para llevar a cabo la VIII Conferencia Guerrillera, donde se definió una evolución de sus estructuras armadas y del marco de actuación de la organización. El cambio estuvo enfocado principalmente en la ampliación de su presencia en el territorio nacional a partir del robustecimiento de la estructura de mando y del despliegue de células operativas regionales y locales. También se concentró en el inicio de un despliegue guerrillero nacional que mitigara los riesgos que podrían suponer la ocurrencia de afectaciones particulares a la comandancia guerrillera y que garantizara así su representatividad y vigencia. Además se desarrolló una estructura de fuerza descentralizada de alcance nacional –dividida en siete regiones que cubrían todo el territorio nacional–, la cual combinaba componentes armados y políticos con miras a consolidar su presencia territorial. Finalmente, definió que esta estructura no solo se basaría en unidades territoriales, sino en columnas móviles dedicadas al desarrollo de acciones ofensivas de ataque y desgaste (FARC, 1993).

La VIII Conferencia también definió la estrategia final para la toma del poder. Las acciones guerrilleras apuntarían a avanzar sobre Bogotá para derrocar al Gobierno Nacional, mientras que las unidades

descentralizadas buscarían en paralelo controlar ciudades capitales para asegurar el sostenimiento del avance sobre Bogotá (ECONOMIST, 2002a, 2002b). La esencia de esta estrategia radicaba en el robustecimiento de las guerrillas como una fuerza con control del territorio –materializando el anhelo de la VII Conferencia (1983)–, representado en la generación de vacíos de poder, negación de elecciones, expulsión de la Fuerza Pública de los territorios, ahogamiento de las ciudades y desarrollo de un marco normativo propio que les permitiera el control social y económico de los ciudadanos (PORTAFOLIO, 2019).

Siguiendo lo planeado, para finales de la década de 1990, las FARC habían logrado avanzar en sus posiciones sobre el territorio. La postura guerrillera a la ofensiva tenía una respuesta limitada por parte de las unidades militares y policiales, concentradas en proteger sus posiciones. Entre 1996 y 1998 fueron secuestrados 238 miembros de la Fuerza Pública en combates y ataques a poblaciones.

Por cuenta de su creciente participación en el narcotráfico, la guerrilla aumentó su capacidad de control social, económico y territorial. Lo anterior se evidenciaba en los 164 municipios sin Policía Nacional y los más de 100 alcaldes desplazados de sus municipios en todo el país a finales de los años 90 (EL TIEMPO, 2000). Las FARC cumplían así consistentemente su hoja de ruta. Acercaban sus estructuras armadas a la capital del país y desarrollaban acciones subversivas y terroristas en las siete zonas en que habían dividido el país (SHIFTER, 1999).

EL PLAN COLOMBIA: LAS FF.AA. SE RECUPERAN DE LA DÉCADA DE 1990

En la década de 1990 las FF.AA. atravesaron un periodo de crisis (SEMANA, 1997b). Mientras enfrentaban debilidades en el ámbito presupuestal e institucional, que se evidenciaban en una moral de combate decaída (SEMANA, 1996), eran atacadas permanentemente por las guerrillas y las organizaciones criminales, mediante el uso del terrorismo, las acciones armadas y la corrupción. Estas organizaciones, financiadas con la producción de narcóticos, el secuestro y la extorsión (HERNÁNDEZ, 2017), ponían a prueba la capacidad de respuesta de una Fuerza Pública caracterizada por estándares de equipamiento, entrenamiento y alistamiento insuficientes (SHIFTER, 1999). A la vez, la ciudadanía exigía

protección, desconociendo la debilidad intrínseca a la que las FF.AA. habían sido sometidas durante los últimos años (SANABRIA, 2017).

En la primera mitad de la década, la violencia narcotraficante, el despliegue guerrillero y el surgimiento de fuerzas privadas de seguridad mostraron la capacidad limitada con las que las FF.AA. enfrentaban el desafío de organizaciones que apostaban por controlar ciudades y áreas rurales. A partir de 1996, las marchas cocaleras y los posteriores golpes recibidos en Las Delicias, Patascoy, Juradó, Miraflores, Mitú, La Carpa, El Billar, por nombrar las más reconocidas, reforzaron la idea general de que la Fuerza Pública no estaba en capacidad de resolver la encrucijada (ECHANDÍA, 2008).

En respuesta a los golpes propinados por la guerrilla, el despliegue ampliado de bandas paramilitares y el incremento del narcotráfico, a partir del último cuatrimestre de 1998 se puso en marcha un ambicioso proceso institucional de transformación e innovación de las FF.AA. de Colombia (RESTREPO, 2016). Como lo hicieron las FARC a lo largo de sus conferencias—cuando definieron una hoja de ruta que las conduciría a la derrota de las instituciones democráticas y la toma del poder (RUEDA, 2000)— el Gobierno colombiano hizo un alto en el camino al final de los años noventa para definir un plan de acción que cambiara el curso de los acontecimientos y negara cualquier posibilidad a los ilegales de tomarse el poder. Sin duda, el primer plan para la derrota financiera, militar y política definitiva (FERNÁNDEZ DE SOTO, 2000). Este proceso tuvo como piedra angular el Plan Colombia (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 1999).

El Plan Colombia arrancó oficialmente en julio de 2000, después de que el gobierno de los Estados Unidos logró apoyo bipartidista a un presupuesto de más de 1.100 millones de dólares para impulsar una estrategia antinarcóticos en Colombia, como parte de un plan integral de construcción de paz (EL TIEMPO, 2016). Por cuenta de estos recursos, Colombia recibió cooperación militar y policial de los Departamentos de Estado y Defensa de EE.UU., destinada a fortalecer las capacidades operativas de las FF.AA.—especialmente en inteligencia, movilidad aérea, operaciones especiales—, con el fin de dismantelar la fuente principal de recursos financieros de los grupos armados ilegales (SIERRA *ET AL.*, 2004). Así mismo, recibió financiación para proyectos de desarrollo alternativo,

desarrollo institucional y protección de Derechos Humanos, con el fin de hacer sostenibles los logros en seguridad (PRESIDENCIA, 1999; DÍAZ JAIMES & CAMILA JOHANA, 2018).

Desde finales de 1998, el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas decidieron poner en marcha una estrategia fortalecida por la cooperación de EE.UU., para frenar el plan de toma del poder que las FARC estaban concretando, así como ponerse a la vanguardia en la derrota del terrorismo y el crimen. Lo anterior con el fin de dar lugar a un proceso sostenido de construcción de seguridad, en pro de aumentar las probabilidades de éxito de las conversaciones de paz con las FARC, el desmantelamiento de otras organizaciones ilegales y la desarticulación del narcotráfico (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 1999).

El Gobierno identificó al narcotráfico como el factor determinante en la generación de violencia, la amenaza contra las instituciones democráticas y la integridad territorial de la Nación. Se definió que al final de un periodo de seis años (1999-2005) los cultivos ilícitos debían estar destruidos en un 50 %. Así mismo, delitos como el secuestro, la extorsión y el terrorismo debían haber disminuido como prueba de la reducción de la capacidad de daño de los ilegales y el desmantelamiento de sus estructuras (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 1999). Igualmente, en el transcurso de los seis años, el Gobierno debía recuperar el control del territorio, reinstalar las autoridades gubernamentales en todos los departamentos y municipios, desmantelar las redes de financiamiento ilegal y romper la logística armada de los grupos al margen de la ley (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 1999).

Vale aclarar que si bien el Plan Colombia en sus elementos centrales definía la estrategia antinarcóticos como su ámbito de actuación, sin duda alguna lo que proponía era una estrategia de seguridad integral. Además del combate a los cultivos ilícitos, la interdicción y la desarticulación de las organizaciones ilegales, la estrategia contemplaba el desarrollo de planes específicos en el mejoramiento de los estándares de Derechos Humanos, así como operaciones aéreas, fluviales y marítimas, y el desarrollo de una doctrina conjunta que potenciara la acción de la Fuerza Pública mediante una mejor coordinación entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (RUBIO, 1993). Para el 2002, gracias a la implementación del Plan Colombia en estos frentes, el Gobierno Nacional había logrado

transformar la trágica realidad que las FF.AA. enfrentaban en la década de 1990. Aunque la estrategia de paz había resultado fallida, la estrategia de fortalecimiento se desarrolló sin mayor contratiempo, reconfigurando definitivamente la capacidad militar y policial del país.

LOS ALREDEDORES DE BOGOTÁ: ZONA EN DISPUTA

Las FARC definieron la toma de Bogotá como un hito determinante en su plan de toma del poder. De ahí que el plan establecido en 1982 y ratificado en 1993 incluyera la creación, la ubicación y el desplazamiento de un número considerable de estructuras armadas sobre la cordillera Oriental (MARTÍNEZ OSORIO, 2006). Desde principios de la década de 1990, las FARC comenzaron a enviar pequeñas comisiones de guerrilleros a la zona. Como relata la periodista Juanita León (2004):

Para entrar a la región las FARC optaron por enviar pequeños grupos de cinco o seis guerrilleros. Los milicianos llegaban vestidos de civil y conseguían un trabajo en la región. Una vez conocían el terreno y convencían a algunos jóvenes campesinos de hacer parte de la guerrilla, daban la orden para que llegara el resto de los miembros del frente y asaltaban las estaciones de Policía.

A finales de la década de 1990, las FARC habían logrado posicionar 10 frentes rurales², dos estructuras interferentes³, tres frentes móviles⁴ y tres estructuras milicianas urbanas⁵ en Bogotá y Cundinamarca (SALAZAR & CRISTANCHO, 2016). Su distribución territorial ocupaba la zona del Magdalena Medio cundinamarqués y el occidente del departamento hasta el Tolima; desde el piedemonte oriental contiguo al departamento del Meta, hasta los Cerros Orientales de Bogotá; el norte contiguo a Boyacá; y el sur, abarcando el área general del páramo de Sumapaz. Solo en las zonas de Ubaté y Sabana Centro, así como en la provincia de Almeida, las FARC nunca lograron consolidar el control del territorio, y por lo tanto allí desarrollaron acciones esporádicas, generalmente con miras a

² Frentes 22, 25, 42, 51, 52, 53, 54, 55, 65, 31.

³ Columna “Che Guevara” y frente “Ballén”.

⁴ Manuel Beltrán, Policarpa Salavarrieta y Abelardo Romero.

⁵ Comandos Urbanos, las Uniones Solidarias Clandestinas y el frente Antonio Nariño.

disminuir presión sobre las zonas de operaciones sostenidas (PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS y DIH, 2001).

El despliegue de las FARC en la periferia de la capital del país les permitió construir un cerco con estructuras fijas y móviles acantonadas en áreas montañosas de las provincias del Guavio y Oriente en Cundinamarca, así como en la zona de San Juanito en el Meta. Y desde el páramo de Sumapaz hasta las provincias de Gualivá, Tequendama, Alto y Medio Magdalena y Rionegro. Así, en estricto sentido del movimiento de las manecillas del reloj, las FARC lograron crear una tenaza que rodeaba el área urbana de la capital del país.

Esta distribución geográfica significaba varias ventajas estratégicas. En primer lugar, la ocupación de corredores viales estratégicos como las vías Bogotá-Medellín, Bogotá-Villavicencio, Bogotá-Tunja y Bogotá-Ibagué, donde secuestraban y atacaban a los transeúntes, así como el bloqueo y afectación de los flujos logísticos (ROJAS *ET AL.*, 2017). En segundo lugar, en las áreas contiguas podían realizar acciones terroristas contra la infraestructura energética y de saneamiento público, así como intimidar y secuestrar autoridades civiles (SEMANA, 2003b).

Durante la segunda mitad de la década de 1990 y los primeros años del siglo XXI, la fuerte presencia guerrillera en esta zona tuvo un gran impacto sobre el orden público. En 1997, por ejemplo, las FARC iniciaron una campaña de hostigamiento para impedir las elecciones de mandatarios locales, secuestrando e intimidando los candidatos a Alcaldías y Concejos para que renunciaran a sus candidaturas. Así mismo, en marzo de 1998 las FARC quemaron la papelería para las votaciones de las elecciones parlamentarias en Paratebuena y Medina; y en julio de ese mismo año el Frente 22 se tomó la cabecera municipal de Yacopí (PÉREZ SALAZAR & TORRES A., 2017).

En julio de 1999 se dio la masacre de 38 soldados en el municipio de Gutiérrez. Al menos 500 guerrilleros al mando de alias ‘Romaña’ atacaron la unidad Texas 3 del Ejército Nacional, aniquilándola (EL TIEMPO, 2019). En ese mismo mes se dio el ataque contra 17 localidades en simultáneo, 11 en la periferia de Bogotá, en Cundinamarca y Tolima (LOZANO, 1999). En suma, de acuerdo con el informe de 2001 del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, entre 1998 y

el 2000, Cundinamarca sufrió 153 acciones armadas propinadas por las FARC. Las provincias de Oriente, Guavio, Sumapaz, Gualivá, Magdalena Medio y Rionegro fueron escenario de al menos el 80 % de los ataques en el departamento, y representaban casi el 20 % del total de ataques en el país (SALAZAR & CRISTANCHO, 2016).

Hasta el 2002 la ofensiva guerrillera estuvo respaldada por la retaguardia estratégica que configuraba la ZD. La mayor capacidad de control de las FARC estaba sobre los límites de esta, desde donde introducían a personas secuestradas en el centro y oriente del país, así como automóviles y ganado hurtado. Allí tenían los centros de cobro de las extorsiones (ECHANDÍA, 2008). En tal medida, la presión ejercida por esa guerrilla sobre Bogotá no estaba concentrada estrictamente en la capacidad armada del dispositivo guerrillero que iba cerrando el cerco sobre la ciudad, sino también a muchos kilómetros de distancia.

Además de la presencia guerrillera, la incursión de grupos de autodefensas también comprometió el bienestar de los habitantes de la zona. En 1996 se detectó la presencia de un grupo paramilitar en San Juan de Río seco. Durante 1997 hubo registros de la presencia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá-ACCU en los municipios del oriente de Cundinamarca. Las ACCU intimidaban a la población rural y realizaban asesinatos selectivos. El terror causado por estas acciones generó desplazamientos masivos en este sector de Cundinamarca (PÉREZ SALAZAR & TORRES, 2017).

A partir de entonces la presencia de autodefensas se consolidó tanto en el oriente cundinamarqués, como en los municipios del suroccidente del departamento, pertenecientes a la provincia de Sumapaz. Hacia mayo de 1998, en Paratebueno se registró la actividad de un grupo de 200 hombres portando brazaletes de las ACCU y de las Autodefensas de los Llanos (PÉREZ SALAZAR & TORRES, 2017). Alrededor de 1998 también tiene lugar la reactivación de paramilitares en el noroccidente de Cundinamarca en las provincias de Rionegro y Gualivá. En esta región ya durante la década de 1980 habían operado grupos de justicia privada bajo órdenes del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. En estos años, además, se verifica la expansión paramilitar hacia la zona esmeraldífera de Gachalá y Valle de Tenza, donde además se concluía la construcción de la represa del Guavio.

En enero de 2001, Carlos Castaño anunció oficialmente la presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC en Cundinamarca y Bogotá. El Frente Capital de las AUC se conformó con el fin de frenarle a la guerrilla el abastecimiento de material de intendencia, de campaña y de guerra que salía de Bogotá, especialmente de Ciudad Bolívar, Kennedy y Usme. En el anuncio, “Castaño también señaló que el Frente Capital operaría en los cascos urbanos de los municipios de Soacha, Facatativá, Sasaima, Tunja y La Calera” (PÉREZ SALAZAR & TORRES, 2017). De acuerdo con Bernardo Pérez Salazar e Iván Arturo Torres (2007), para el año 2002:

Las Autodefensas Campesinas de Cundinamarca bajo el mando de Luis Eduardo Cifuentes, alias ‘El Águila’ aterrorizaron los municipios de Villeta, La Palma, La Peña, Topaipí, mientras que las Autodefensas del Magdalena Medio, bajo el mando de Carlos Hernán Hernández Giraldo, alias ‘El Pájaro’, asolaban otros municipios del noroccidente cundinamarqués, entre ellos, Nariño, Gataquí, San Juan de Río seco, Chaguaní, Guaduas, Nimaima. Por su parte en el suroccidente, las Autodefensas Campesinas de Casanare, bajo el mando de alias ‘Martín Llanos’ cundían el horror entre los pobladores de Fusagasugá, Silvania y Viotá, mientras que en los municipios del oriente cundinamarqués, entre ellos, Machetá, Gachetá, Gachalá, y Medina hacían presencia unidades del Bloque Centauros.

En suma, tras la finalización de la zona de distensión, Cundinamarca se había transformado en un área con presencia de numerosas estructuras ilegales que luchaban por el control de áreas estratégicas para el cumplimiento de sus objetivos particulares. Mientras las FARC buscaban cerrar el cerco sobre Bogotá y conectar la ciudad con sus núcleos de mando, las autodefensas en sus diferentes manifestaciones se ubicaban en áreas específicas del territorio departamental y la periferia de la capital, con una intrínseca relación con actividades de crimen organizado. En últimas, era la población civil la más afectada, en tanto era víctima de los ataques tanto de las FARC como de los grupos de autodefensas ilegales.

ESFUERZOS MILITARES EN LA ZONA PREVIOS A LA OPERACIÓN LIBERTAD I

Las operaciones desarrolladas por las FF.AA. en Cundinamarca antes de Libertad I se concentraron en dismantelar la retaguardia de las FARC

en el Sumapaz. Desde allí esa organización concentraba sus fuerzas y capacidades logísticas, y ejercía el comando y control interbloques. También hubo esfuerzos por proteger las franjas occidental y oriental con el fin de dismantelar estructuras guerrilleras históricas que representaban una amenaza para los activos estratégicos de la Nación y el abastecimiento de la capital. En Bogotá, la Fuerza Pública también trabajaba en la desarticulación de las células terroristas (SIERRA *ET AL.*, 2004; ROJAS *ET AL.*, 2017). En la periferia de Cundinamarca, tanto los Farallones de Medina, que conectan al Meta con el acceso a Bogotá desde oriente, como la franja centro-oriental del Tolima, también significaron áreas clave para el despliegue de las operaciones, dada su categoría de corredores de movilidad estratégicos para el traslado de refuerzos armados, desde lo Llanos Orientales y la Cordillera Central (FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ, 2013).

Aniquilador II (2000) fue una de las operaciones clave lanzadas por las FF.AA. en este sector. Con esta Operación se esperaba recuperar el control del Sumapaz y cortar el corredor de las FARC a la ZD. Por este corredor entraba una parte importante de los explosivos utilizados en acciones terroristas, y además transitaba el flujo de secuestrados provenientes de Bogotá y el suroccidente de Cundinamarca (PÉREZ SALAZAR & TORRES, 2017). Esta Operación representó un enorme despliegue militar. Cerca de 4.000 soldados, con el apoyo de la FAC, avanzaron desde diferentes flancos en la procura de cercar y hacer replegar al Bloque Oriental de las FARC (LAS DOS ORILLAS, 2018).

Tras la operación militar Aniquilador II, el Alto de las Águilas –una planicie estratégica ubicada en medio de las montañas del municipio de Cabrera, hasta el año 2000 controlada por las FARC– pasó a ser el eje de las operaciones de las Fuerzas Militares en el Sumapaz (CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA, s. f.). Allí, en mayo de 2001, comenzó a funcionar el batallón de Alta Montaña No. 1. Según explicó a la prensa el entonces comandante de la Brigada 13 del Ejército, Brigadier General Jorge Humberto Jerez, la misión del batallón era “cerrar cualquier avance o intención de las FARC de ingresar a Cundinamarca y a Bogotá, a través del Sumapaz” (COLPRENSA, 2013). La prensa anunció que este batallón, ubicado a poco más de dos horas de Bogotá y de un costo aproximado de 1.000 millones de pesos, sería el primero de cinco que se construirían en el país (VÁSQUEZ, 2001).

En 2001 y 2002 se intensificó la ofensiva del Ejército en la zona, con la puesta en marcha del Plan Candado. Este plan definió como objetivo estratégico el cierre de espacios para la movilidad de las estructuras guerrilleras en Cundinamarca y alrededores de Bogotá, rompiendo la movilidad entre la capital y la zona desmilitarizada del Caguán. La intensidad de éste aumentó a partir de la ruptura de los diálogos entre el gobierno Pastrana y las FARC, y la terminación de la zona desmilitarizada ocurrida en febrero de 2002. El Plan Candado dio inicio a la reducción del terrorismo y el secuestro, tanto en el oriente y suroccidente de Cundinamarca, como en Bogotá.

La respuesta de las estructuras de las FARC en el oriente de Cundinamarca a la ofensiva de las FF.AA. fue una campaña de atentados contra torres de conducción de energía eléctrica, así como la incineración de vehículos de transporte público y carga pesada, principalmente en los municipios de Medina, Junín y Une, al igual que en Gachalá y Gachetá. Las FARC también realizaron un atentado contra la presa Golillas, del sistema Chingaza, la cual abastece a la ciudad de Bogotá con agua potable (PÉREZ SALAZAR & TORRES, 2017). Por su parte, en el suroccidente de Cundinamarca, fue una campaña de atentados contra torres de conducción de energía eléctrica en los municipios de Sylvania, Viotá y Quétame, al igual que retenes ilegales en las vías principales y la amenaza contra funcionarios de las administraciones locales, que eran intimidados para que renunciaran. Con esto último se quería paralizar la actividad pública en los municipios. Lo anterior tuvo lugar en Fusagasugá, Pasca, Granada, Sibaté y Soacha, entre otros (PÉREZ SALAZAR & TORRES, 2017).

A diferencia de lo que ocurrió en el oriente y suroccidente de Cundinamarca, entre 2001 y 2002 las estructuras de las FARC ubicadas en el noroccidente del departamento no se vieron comprometidas en las operaciones de contención que adelantaron las FF.AA. Por lo tanto, las actividades de secuestro y extorsión realizadas por la insurgencia en esta área continuaron en un nivel similar a las que traían desde la década de 1990, y fueron acompañadas por una intensa campaña de atentados contra torres de conducción de energía y comunicaciones, voladura de puentes, hurto e incineración de vehículos, ataques a estaciones de Policía y amenazas contra autoridades locales en municipios de San Juan de Río seco, Chaguaní, Guaduas, Villera, Nimaima, La Peña, La

Palma y Topaipí (PÉREZ SALAZAR & TORRES, 2017). Teniendo en cuenta lo anterior, no sorprende que cuando las FF.AA. retomaron la iniciativa militar en Cundinamarca luego de las exitosas campañas llevadas a cabo en el oriente y suroccidente del departamento, el objetivo prioritario haya sido el desmantelamiento de las estructuras insurgentes ubicadas en el noroccidente. Este propósito marcó la planeación y ejecución de la Operación Libertad I, llevada a cabo durante 2003.

LIBERTAD I: UNA OPERACIÓN DE IMPORTANCIA NACIONAL

El inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) dio lugar al diseño de la Política de Defensa y Seguridad Democrática-PDSD, un marco estratégico que las diversas entidades gubernamentales debían seguir para la elaboración de sus respectivos planes y estrategias (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA & MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 2003). En 2003, con base en la PDSD, se puso en marcha el Plan Patriota, una estrategia militar y policial que priorizó el desmantelamiento de los grupos armados irregulares mediante el desarrollo de grandes operaciones militares sostenidas en el tiempo (ECHANDÍA CASTILLA, 2011). Siguiendo la PDSD, este plan buscaba la “consolidación del control estatal del territorio” y “la recuperación gradual de la presencia de la Fuerza Pública en todos los municipios” (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA & MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 2003). Fue en este contexto en el cual se dio la Operación Libertad I.

Dos eran los propósitos fundamentales de la Operación. Uno de alcance inmediato: defender a Bogotá del avance de las FARC. Para ello se tenía como premisa estratégica la adopción de un plan inverso al empleado por esta guerrilla. Es decir, se esperaba recuperar el control territorial comenzando desde la periferia de la capital, expandiéndose posteriormente hacia la consolidación del control de los territorios al sur (PEÑA, 2016). Dado que la recuperación de la iniciativa militar desde el centro político, económico y militar del país era la base fundamental de la puesta en marcha del Plan Patriota, la Operación Libertad I representaba la base de una campaña en profundidad contra esta organización guerrillera, que buscaba presionarla a concentrarse en su retaguardia estratégica. Este objetivo más amplio, era el segundo propósito fundamental de la operación (SEMANA, 2003b).

El objetivo estratégico de la Operación Libertad I era negar el plan de ataque de las FARC contra la capital del país, definido por esa guerrilla con base en cuatro acciones específicas: dejar sin energía a la ciudad, urbanizar el terrorismo, bloquear los accesos a la ciudad para incomunicarla y los proyectos LINA–Lucha Insurreccional No Armada y LM2– Línea Militar de Masa (ROJAS *ET AL.*, 2017). Para lograr este objetivo, la Fuerza Pública debía concentrarse en desarticular las estructuras guerrilleras (PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH, 2008).

Si se lograba dismantelar el dispositivo guerrillero, no solo se frenaría el avance hacia la ciudad (LOZANO, 2003), sino que se acabaría con los espacios desde donde amedrentaban a los ciudadanos y las empresas con su campaña de secuestro y extorsión. De paso se daría un golpe estructural a las finanzas de esa guerrilla (PÉREZ, 2019). También se protegerían los activos estratégicos energéticos, los acuíferos y las comunicaciones. Para las FF.AA. no solo había que bloquear la llegada de las FARC a la capital, sino mantener el funcionamiento de la ciudad sin contratiempos.

Para cumplir con estos objetivos, resultaba trascendental devolver la Policía Nacional a todas las poblaciones, garantizar el libre ejercicio de las autoridades políticas y eliminar la presión guerrillera sobre los pobladores de los municipios ubicados en la periferia de la capital. Además, recuperar los corredores viales hacia y desde Bogotá para garantizar el abastecimiento de la ciudad. Todo lo anterior era fundamental para reconstruir la confianza ciudadana en la capacidad de las FF.AA. de derrotar a la amenaza terrorista y criminal que representaba las FARC (SEMANA, 2003a; SEMANA, 2003b).

Las FF.AA. se propusieron bloquear los corredores de movilidad y logística que, a través del páramo de Sumapaz, conectaban a Bogotá con La Uribe, Meta, y servían de canal de aproximación de los Bloques Sur y Oriental y el Comando Conjunto Central. Además, dismantelar las retaguardias y atrasar las líneas de la guerrilla en el territorio, a partir del ataque a sus campamentos base, la desarticulación de sus redes de apoyo y la neutralización de sus cabecillas (PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH, 2001). No cumplirlo haría casi imposible lanzar la siguiente ofensiva sobre La Macarena, Vistahermosa y La Uribe,

lugares de acantonamiento del Estado Mayor Central de las FARC y del núcleo más importante del Secretariado y, por tanto, eje neurálgico para el debilitamiento de esta organización (SEMANA, 2003b). De ahí, puede decirse que del cumplimiento de los objetivos estratégicos de Libertad I, dependía el desarrollo del Plan Patriota en sus fases subsiguientes.

PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LA OPERACIÓN LIBERTAD I

La Operación Libertad I fue concebida y comandada por el comandante de la V División del Ejército Nacional, General Reinaldo Castellanos, bajo el liderazgo del Comandante General de las Fuerzas Militares, General Jorge Enrique Mora, y el comandante del Ejército Nacional, General Carlos Alberto Ospina. Tuvo el direccionamiento operacional del Brigadier General del Ejército, Hernando Ortiz, comandante de la FUDRA. En términos generales la Operación tuvo tres fases: en la primera se ejecutó la preparación, el alistamiento y el despliegue (enero-junio de 2003); en la segunda se desarrolló la ofensiva (julio-diciembre de 2003); y en la tercera se inició la consolidación del territorio de Cundinamarca, de la mano de los planes de acción integral como base para una acción coordinada del Estado (a partir de enero de 2004) (MARTÍNEZ OSORIO, 2006).

La concepción y diseño de la Operación tenía bases sólidas. Los oficiales encargados de inspirarla, liderarla y comandarla contaban con un profundo conocimiento del desarrollo reciente de las FARC en los departamentos de Cundinamarca, Meta y Guaviare. También habían ejercido el liderazgo reciente de las unidades especializadas en inteligencia, que durante los últimos años habían logrado develar las claves de la ruta estratégica trazada por las FARC para la toma del poder. Específicamente se basaron en información de inteligencia técnica y humana recogida en la zona, documentos de las FARC y entrevistas con los desertores de los frentes guerrilleros de Cundinamarca y Meta.

El esfuerzo principal de la Operación recayó sobre la V División del Ejército Nacional, encargada del liderazgo de cerca de 30.000 efectivos pertenecientes a todos los componentes de la Fuerza Pública (SEMANA, 2003b). Dentro de los componentes se encontraban la Brigada XIII, Comando Operativo del Sumapaz, Brigada I y la Brigada

VI al oriente del Tolima, encargadas de asegurar las poblaciones (MARTÍNEZ OSORIO, 2006; ROJAS *ET AL.*, 2017). La ofensiva sobre las áreas base correspondió a la FUDRA, con las brigadas móviles 1, 2 y 3; la Brigada Móvil 8 y los batallones de contraguerrillas 1, 13, 31 y 3. En este despliegue ofensivo jugaron un papel determinante el batallón de Alta Montaña de Sumapaz y el Grupo de Localización de Cabecillas-GRULOC. La inteligencia para el desarrollo de las operaciones estuvo en cabeza de la Regional de Inteligencia No. 5 (SEMANA, 2003b; MARTÍNEZ OSORIO, 2006; ROJAS *ET AL.*, 2017).

El componente aéreo de la Operación fue liderado por el Comando Aéreo de Combate 4 –CACOM-4, con el apoyo de los CACOM 1 y 2, así como el Comando de Aéreo de Mantenimiento– CAMAN. Estas unidades se encargaron de brindar apoyo para el transporte de tropas y el abastecimiento logístico, apoyo aéreo cercano y operaciones de observación, vigilancia e inteligencia técnica. De igual manera, destinaron sus capacidades al control del espacio aéreo y a la evacuación aeromédica. Los equipos con mayor participación en la operación fueron los helicópteros Bell 212 Rapaz y de rescate de personal, así como los UH-60 de asalto y Arpía III (ESQUIVEL, 2016; FAC, 2019b), los cuales estuvieron brindando soporte operacional y apoyo aéreo cercano desde los diferentes comandos aéreos de combate. También hubo plataformas de inteligencia técnica (FAC, 2019a) Súper King, que alimentaban el centro de fusión de información ubicado en CAMAN, y aviones de transporte de tropa y abastecimientos C-130Hércules operando desde CATAM. La Fuerza Aérea también puso en marcha el programa de tiradores de alta precisión: (Tiradores Escogidos de Plataforma Aérea –TEPLAS (FAC, 2019c), para el acompañamiento de las operaciones contra blancos de alto valor⁶.

La Operación Libertad I también contó con el apoyo de soldados campesinos oriundos de la región. 2.100 soldados regulares reclutados en la región pasaron a conformar 59 pelotones de soldados campesinos vinculados a la Brigada 13, con sede en Bogotá (PEÑA, 2016). La misión de estos soldados era recoger información sobre la ubicación de los guerrilleros y patrullar las vías para cortar la línea logística de las FARC (LEÓN, 2004; PÉREZ SALAZAR, 2010). La labor de estos jóvenes fue fundamental, ya que

⁶ Entrevista a oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana que participaron en la Operación.

acercaron el Ejército Nacional a los pobladores locales, facilitando las labores de inteligencia (LEÓN, 2004; PEÑA, 2016). Esta era una estrategia definida en la PDS, que promovía que los jóvenes prestaran el servicio militar en sus zonas de origen. Esto permitía “a un mayor número de soldados mantener sus vínculos con la comunidad y a la comunidad desarrollar relaciones de confianza con la Fuerza Pública” (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA & MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 2003).

Durante la Operación Libertad I, además de la implementación de soldados campesinos, se adelantaron otros esfuerzos para la construcción de confianza entre la comunidad y las FF.AA. Junto a los combates y las tareas de inteligencia, las FF.AA. desplegaron brigadas de salud con médicos militares a las veredas, víveres a los hogares infantiles; usaron emisoras locales para invitar a los padres de guerrilleros a acercarse sin temor a la Brigada a preguntar por el paradero de sus hijos; ayudaron a los campesinos a recoger sus cosechas; se involucraron en las actividades comunitarias e, incluso, participaron en festivales populares (PEÑA, 2016).

El acercamiento a las poblaciones tenía como objetivos construir confianza en las FF.AA., fortalecer la legitimidad de la acción institucional y lograr que la ciudadanía cooperara con la Fuerza Pública en el desarrollo de la misión. De acuerdo con la PDS, la seguridad debía y tenía que ser producto del esfuerzo colectivo de la ciudadanía (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA & MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 2003). En la política se establecía lo siguiente:

El Gobierno promoverá la cooperación voluntaria y patriótica de los ciudadanos, en cumplimiento de sus deberes constitucionales y en aplicación del principio de solidaridad que exige el moderno Estado social de Derecho, con el fin de que cada ciudadano contribuya a la prevención del terrorismo y la delincuencia, proporcionando información relacionada con las organizaciones armadas ilegales.

Específicamente se planteaba que las autoridades debían desarrollar programas de prevención, estrechando los vínculos entre la Fuerza Pública y el comercio, las compañías privadas de seguridad, las empresas públicas y la ciudadanía en general, para tejer unas redes de alerta temprana que aseguraran la protección de la población y de la

infraestructura del país (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA & MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 2003).

Además de la búsqueda de apoyo voluntario, la PDSD establecía que se debía poner en práctica un programa de recompensas para aquellas personas que, como informantes de los organismos de seguridad del Estado, dieran a conocer información que condujera a la prevención de atentados terroristas o a la captura de integrantes de las organizaciones armadas ilegales (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA & MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 2003).

Dentro del conjunto de innovaciones que acompañaron esta operación, además de la integración operacional de todos los componentes de las FF.AA. y la Policía Nacional, también se debe resaltar la flexibilidad operativa que dio el despliegue en el territorio en pequeñas escuadras, el trabajo de acción integral para el acercamiento a las poblaciones locales y la estructuración de la inteligencia enfocada en la concreción de objetivos estratégicos de alto valor (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 2003; PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS, 2008). Como puede observarse en sus innovaciones tácticas y estratégicas, la Operación Libertad I no solo fue la culminación de un periodo de alistamiento de las FF.AA. para enfrentar los desafíos de las FARC, sino el punto de partida de la revolución militar que se requería para un cambio definitivo en el tablero estratégico su favor.

LIBERTAD I: UNA CAMPAÑA MILITAR QUE CUMPLIÓ SUS OBJETIVOS

En total tuvieron lugar 197 enfrentamientos durante los meses que se mantuvo la Operación Libertad I (LEÓN, 2004; PEÑA, 2016). La neutralización más importante fue la de alias ‘Marco Aurelio Buendía’, cabecilla del Comando de Occidente y miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental. Esta baja se dio en un combate ocurrido entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2003. ‘Marco Aurelio Buendía’ había logrado escapar previamente de 15 operaciones puntuales. En esa ocasión fue abatido, junto a otros ocho guerrilleros, gracias al trabajo de la Brigada Móvil 3 –tres batallones de contraguerrillas, alrededor de 600 hombres– la cual fue movilizada para establecer tres anillos en el área donde se encontraba ‘Buendía’ (MARTÍNEZ OSORIO, 2006).

De acuerdo con el General Castellanos, ‘Buendía’ era “un guerrillero muy preparado, disciplinado y de gran capacidad de planificación, dirección y liderazgo” (MARTÍNEZ OSORIO, 2006). La baja de ‘Buendía’ fue probablemente el golpe más fuerte propinado a las FARC durante la Operación Libertad I, pues él era el encargado de coordinar todos los frentes de la zona (EL TIEMPO, 2003b). Era el hombre de confianza del ‘Mono Jojoy’ en la región y, según la prensa, quien había sido encargado por este para llevar a cabo la ofensiva final sobre Bogotá (SEMANA, 2003b). Junto a ‘Buendía’ cayeron también Javier Gutiérrez, alias ‘JJ’, comandante de la columna Esteban Ramírez, y Gustavo Lasso Céspedes, alias ‘El Gato’, segundo comandante de esa cuadrilla (EL TIEMPO, 2003a).

Antes de la caída de ‘Buendía’, las FARC ya habían recibido otros golpes certeros y contundentes con capturas y neutralizaciones de guerrilleros. Según una cronología publicada el 8 de noviembre de 2003 por el diario El Tiempo, las principales bajas habían sido las siguientes: José Darío Canchi, cabecilla de finanzas de la columna Esteban Ramírez (4 de julio); alias ‘Luis’ o ‘Julián’, cabecilla de finanzas del frente 22 (20 de julio), Pedro Maturana, alias ‘Cotoplo’, segundo comandante de la cuadrilla Vladimir Stivel (27 de agosto), Milton Tovar, segundo jefe de finanzas de la columna Esteban Ramírez (14 de septiembre), Andrés Pérez, alias ‘El Peruano’, segundo cabecilla del frente 22 (23 de septiembre), José Abel Luengas, alias ‘Pablo Morillo’, comandante del frente Policarpa Salavarrieta (23 de octubre).

Pocos días después de la muerte de ‘Buendía’, cayó también Luis Alexis Castellanos, alias ‘Manguera’, hermano de alias ‘Romaña’. Castellanos dirigía la columna Manuela Beltrán por el oriente del departamento. También fue abatido alias ‘Rumba’, quien dirigía la columna Reinaldo Cuéllar (EL TIEMPO, 2003a), una célula de la columna Esteban Ramírez, la cual tenía como misión cometer actos terroristas en la vía Bogotá-Chiquinquirá. En diciembre de 2003 continuaron los golpes. Ese mes fueron abatidos Adán Rodríguez, al mando del frente Reinaldo Cuéllar, y alias ‘Hugo’, quien con 18 órdenes de captura y señalado como responsable de los secuestros de los esposos Bickenbach y del japonés Muramatsu, era tal vez el guerrillero más buscado de Cundinamarca para ese momento (EL TIEMPO, 2003b).

Puede decirse que, en términos de golpes a las FARC, la Operación Libertad I fue un éxito. Para el final del año 2003 se había logrado dar de baja a los principales cabecillas de las estructuras insurgentes en el occidente de Cundinamarca y “comprometer la operatividad militar, logística y financiera de las FARC en la región” (PÉREZ SALAZAR, 2010). De 1.130 guerrilleros que fueron calculados como desplegados en el área al inicio de la Operación, al final se estimaban que había tan solo 335 (ECHANDÍA & BECHARA, 2006; TORRES, 2011; ROJAS *ET AL.*, 2017). La Operación Libertad I obligó a las FARC a replegar las estructuras que sobrevivieron a la ofensiva sostenida de las Fuerzas Armadas hacia las áreas de los ríos Duda y Papaneme al sur del Sumapaz (MOLANO J., 2016), y más allá del piedemonte llanero, en el departamento del Meta (FORERO *ET AL.*, 2017; ROJAS *ET AL.*, 2017). Esto en la práctica significó para las FARC la pérdida de uno de los dos objetivos estratégicos trazados con la distribución territorial definida en la VIII Conferencia, y el comienzo de la pérdida del segundo.

IMPLICACIONES DE LA VICTORIA OBTENIDA DURANTE LIBERTAD I

Para el 2003, un número importante de analistas llamaba la atención sobre la urbanización de la confrontación con las FARC (ECHANDÍA & BECHARA, 2006). No era una suposición. Tanto alias ‘Mono Jojoy’, como alias ‘Carlos Antonio Losada’ amenazaban a su salida del Caguán con la llegada de las estructuras guerrilleras a las grandes ciudades. En este sentido Echandía y Bechara señalaban que “el objetivo de extender el conflicto armado a las ciudades no debe subestimarse, dado que en el futuro podría ser el medio utilizado por la guerrilla para adquirir una mayor capacidad de negociación y apalancar una demanda de mayor participación en el poder” (2006).

Uno de los mayores logros de la Operación Libertad I fue precisamente negar la posibilidad a las FARC de avanzar sobre Bogotá. Así como en otras operaciones desarrolladas en paralelo en otras zonas del país —Operación Marcial, entre ellas—, el repliegue obligado de la guerrilla desde la periferia bogotana fue la terminación anticipada de la fase urbana. Esta quedó reducida a acciones de terrorismo indiscriminado, ante la necesidad de reagrupar fuerzas para la protección de sus retaguardias estratégicas.

Por cuenta de la recuperación del territorio en torno a Bogotá, se logró dar un golpe contundente al secuestro. La presencia permanente la Fuerza Pública acabó con los espacios libres para la retención y movilización de los secuestrados. Se dio una disminución del 64 % en los plagios en el departamento. Además, la Operación permitió la liberación de 17 secuestrados (PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH, 2003). De otra parte, el debilitamiento de las estructuras y por lo tanto del control social dio como resultado una disminución de los homicidios. Comparado el periodo entre 1998 y 2002 (4.393 homicidios) con el que abarca los años 2003 a 2007 (2.907 homicidios) se registra una disminución del total de los homicidios del 44 % (PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH, 2008).

Con la disminución del secuestro y de los homicidios, la recuperación de las carreteras y de la seguridad en la movilidad, y el retorno durante el segundo semestre de 2003 de la Policía a los municipios de donde había sido expulsada, se produjo una vertiginosa recuperación de la moral ciudadana y de la credibilidad en las instituciones (SEMANA, 2003a; AGUILERA, 2014).

Con Libertad I, las FF.AA. lograron desarticular el dispositivo de asedio contra Bogotá de las FARC y fracturar el centro de su despliegue estratégico en el Sumapaz. Para el final de 2003, se había logrado neutralizar los principales cabecillas de las estructuras insurgentes en Cundinamarca, comprometiendo de esa manera la operatividad militar, logística y financiera de esa guerrilla en la región (PÉREZ SALAZAR, 2010). Lo anterior lo confirma alias ‘Carlos Antonio Losada’ en entrevista con Alfredo Molano Jimeno para *El Espectador* (MOLANO J., 2016): “...Nos cortaron las vías de abastecimiento, de retirada y se nos soltó encima una operación militar muy grande que terminó con un golpe a todos los frentes.”

La Operación también significó un golpe de realidad contundente para las FARC. Las FF.AA. del momento representaban una institucionalidad militar con la moral renovada, bien financiada y equipada. Unas FF.AA. que bajo el apoyo generalizado de la sociedad colombiana –82 % de favorabilidad a finales de 2003 (GALLUP, 2017)– no solo habían revertido su estado de derrota, sino que se sentían invencibles.

MEJORES PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS

Además de la recuperación del control territorial y la inyección de confianza en las instituciones armadas y el Gobierno, la Operación Libertad I significó una especie de laboratorio de adaptaciones y transformaciones tácticas y estratégicas enfocadas en la optimización de los recursos, el mejoramiento del despliegue de las capacidades y la interiorización del plan enemigo en sus fortalezas y debilidades.

En el ámbito de la inteligencia, la Operación Libertad I significó el desarrollo de procesos más avanzados de fusión de inteligencia que permitieron desarrollar misiones de orden estratégico y direccionar el desempeño táctico de las unidades. En el primer caso, la generación de paquetes de inteligencia que permitieran neutralizar un número importante de cabecillas locales, rompiendo el comando y control de la toma de Bogotá. En el segundo, brindando mayor seguridad operacional a partir de un conocimiento más detallado del contexto operacional y de la naturaleza táctica y operacional de las estructuras de las FARC, evitando así que se volvieran a registrar tragedias como la ocurrida en Gutiérrez en 1999 (SEMANA, 2003; SIERRA, MASERI, & BEDOYA, 2004; PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH, 2008; TORRES, 2011; ROJAS *ET AL.*, 2017).

La muestra más importante de ello es el cambio en cómo se dio el despliegue sobre el terreno de la V División del Ejército. La fragmentación en pelotones brindó la agilidad suficiente para darle profundidad a la maniobra y por lo tanto copar puntos críticos y corredores, que permitieron el posicionamiento de unidades adelantadas en apoyo del batallón de Alta Montaña de Sumapaz. A esto se sumó la operación de la FUDRA en escuadras, la cual fortaleció la capacidad de neutralización de blancos de alto valor estratégico y con ello la desmoralización de las células guerrilleras (PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH, 2008; TORRES, 2011; ROJAS *ET AL.*, 2017).

Sumado a lo anterior, la puesta en marcha del programa de soldados campesinos brindó una mayor conexión con los habitantes locales. Estos, junto al despliegue sostenido de las unidades militares, el regreso policial y la consolidación del territorio, aumentaron la confianza de los ciudadanos en la oferta de seguridad del Estado y por lo tanto los

flujos de información certera sobre los movimientos de las estructuras de las FARC. La construcción de confianza también se fundamentó en el desarrollo de acciones no cinéticas que se extendían desde las típicas brigadas de salud, campañas de información y asistencia a las poblaciones, hasta el fortalecimiento de los programas de recompensas y de atención humanitaria al desmovilizado. Sobre estos elementos se construyó la sostenibilidad de los resultados y del control territorial.

Los cambios en la forma de operar y la incorporación de nuevas herramientas tácticas y estratégicas le generaron un desafío a las estructuras guerrilleras que estas no pudieron contraponer. En parte esto fue el resultado de una lectura fallida por parte del Estado Mayor del Bloque Oriental del nuevo contexto estratégico. También fue importante la focalización de las operaciones en la destrucción de las líneas logísticas y el agotamiento de sus fuentes de financiamiento provenientes del secuestro y la extorsión.

Ahora bien, la Fuerza Pública no estuvo exenta de problemas. En el ámbito operacional, el importante número de operaciones en altura disminuyó la eficiencia en el despliegue de tropa y aumentó las enfermedades entre los soldados por las extremas condiciones climáticas. Frente a esto, las FF.AA. se vieron obligadas a desarrollar una capacidad robusta para operar sobre las cordilleras, la cual en los años siguientes sería determinante para el éxito de nuevas operaciones.

Debió, además, acelerarse el desarrollo de la cartografía para el páramo de Sumapaz y las áreas contiguas –inexistente hasta el momento–, como requisito fundamental para la ampliación de la capacidad de apoyo y abastecimiento aéreo, en el entendido de la necesidad, no solo de sostener la posición, sino de apoyar las operaciones en profundidad hacia el Meta. Con esta acción, el Estado y las FF.AA. completaban el conocimiento de una zona que les había sido esquiva por décadas y de paso sembraban las bases para su control definitivo.

Hubo problemas respecto a la construcción de confianza y la consolidación del territorio. Los programas que buscaban la participación de la ciudadanía, de manera voluntaria y mediante la entrega de incentivos, resultaron importantes para lograr dismantelar varios frentes de las FARC en Cundinamarca. Sin embargo, la puesta en marcha de detenciones

masivas enfocadas en la desarticulación de redes de apoyo, también golpearon en ocasiones las relaciones con la comunidad (PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH, 2008). Según Leal Buitrago (2006), “hubo problemas con el plan de detenciones masivas, basadas en informaciones de la red de cooperantes, pues la mayoría de los detenidos tenían que ser puestos en libertad al poco tiempo, con los consecuentes costos para la legitimidad de la Fuerza Pública”.

El poder aéreo también recolectó lecciones que posteriormente se convertirían en líneas estratégicas para el desarrollo de la FAC. En primer lugar, se identificó la necesidad de unificar las prestaciones de las plataformas de inteligencia. Recuérdese que durante Libertad I, las diferentes plataformas salían al cumplimiento de la misión, sin que pudieran construir un panorama concreto en tiempo real, dado que los equipos de recolección y análisis de información no estaban integrados. Se empezó a desarrollar el equipamiento de las aeronaves con sistemas de observación infrarrojos FLIR (FAC, 2019a).

Las tripulaciones aéreas no solo encontraron dificultad en sus misiones en altura. La densidad poblacional del departamento de Cundinamarca y sus zonas adyacentes, obligó a la FAC a desarrollar misiones tácticas de apoyo y combate en áreas contiguas a concentraciones urbanas y zonas rurales habitadas. Estas características aumentaban la dificultad, puesto que se debía proteger a la población en medio del fuego. Además, la infraestructura y construcciones civiles obstaculizaban el vuelo. No haber tenido un accidente o causado un daño colateral en el contexto de esta Operación demuestra el éxito de las tripulaciones y del personal de apoyo. Estos profesionales lograron poner en práctica las lecciones aprendidas en la retoma del Caguán y en otras operaciones anteriores a Libertad I.

Se debe resaltar la capacidad de coordinación desarrollada por la FAC con autoridades civiles y policiales para el uso de la infraestructura aeroportuaria de la capital, caracterizada por un tráfico denso y permanente de aeronaves civiles. Este aspecto resultó fundamental, no solo para el cumplimiento de los planes operacionales, sino para la atención oportuna de ataques de las FARC que se convertían en contingencias sobrevinientes, las cuales podrían poner en riesgo el éxito de la operación.

COMENTARIOS FINALES

La revisión de la Operación Libertad I permite comprender por qué algunos analistas y miembros de las Fuerzas Armadas encuentran que esta Operación es una de las más importantes de la historia reciente del país.

Su importancia está íntimamente relacionada con el cambio del peso específico en el tablero estratégico del conflicto armado que venían teniendo las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Esto se sumó a la recuperación de la confianza de un número importante de ciudadanos –como lo demuestran las mediciones de la encuesta Gallup de la época– sobre que era posible restituir el imperio de la Ley y por ende la legitimidad del Estado.

Más allá de cifras sobre la neutralización de combatientes, desmovilizaciones o de incautaciones de material de guerra, tan comunes para definir cuál de las partes enfrentadas resultó siendo más eficaz, esta Operación dejó como resultado un cambio sustancial en el rumbo de la confrontación.

Se logró la retoma de un territorio y la conservación de la supremacía sobre él. A principios del siglo XXI, las FF.AA. ya habían desarrollado grandes despliegues operacionales que incluían algunos de los elementos utilizados en Libertad I. Las operaciones Tsunami en el pacífico nariñense y Gato Negro en el Vichada en 2001 mostraron la escala del despliegue operacional que la Fuerza Pública había empezado a desarrollar. Sin embargo, no lograron concretar la capacidad de sostenimiento de la operación y por lo tanto del control de los territorios.

En el caso de Libertad I, el conocimiento del contexto geográfico, social y económico, de la mano de una caracterización meticulosa del enemigo hecha por años, permitió a la Fuerza Pública pasar de derrotas, como la ocurrida en Gutiérrez en 1999, a controlar el páramo de Sumapaz y los accesos a la sabana de Bogotá. En esto jugó un papel fundamental el grupo de comandantes, quienes eran conocedores no solo de las áreas de operaciones sino de las áreas contiguas.

Otros indicadores, ya enumerados anteriormente, son la liberación de secuestrados, la caída del secuestro y la extorsión, la recuperación de los corredores viales, el regreso de la Policía a los cascos urbanos y de los alcaldes a las Alcaldías, y el debilitamiento de las células terroristas urbanas –evitando

con eso más hechos sangrientos como los del Club El Nogal—. Estos elementos marcaron una diferencia en la vida cotidiana de los ciudadanos, hasta ese año más amedrentados que nunca por el conflicto armado.

Libertad I muestra el éxito en la transformación y modernización del sector defensa y seguridad de la mano de la cooperación internacional. El Plan Colombia no solo aportó material, equipos, doctrina e inteligencia. También generó un nuevo marco de referencia que potenció la logística, la gestión de la seguridad y la coordinación interagencial mas allá del sector defensa. La acción integral, las operaciones no cinéticas y la recuperación de la confianza de los ciudadanos locales no hubiera sido posible de no haberse avanzado en estos frentes.

Todo esto tuvo un efecto futuro determinante por cuenta de la materialización de dos impuestos al patrimonio aprobados por el Congreso de la República para el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en gran medida debido a la confianza que estas instituciones habían generado en la aplicación juiciosa y productiva de la cooperación de los EE.UU.

La Operación significó un laboratorio táctico, operacional y doctrinario, definitivo para afrontar las futuras batallas libradas en los santuarios guerrilleros. Sin las lecciones aprendidas respecto a operaciones en altura, fusión de inteligencia, operaciones en áreas pobladas, desmovilización, apoyo aéreo cercano, control de área, entre otras, hubiese sido imposible calibrar el despliegue de capacidades adecuado para avanzar sobre las retaguardias estratégicas en La Macarena, el sur del Tolima, la Cordillera Oriental y el nudo de Paramillo.

Esto tal vez represente uno de los elementos más importantes para todos los componentes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en relación con la potenciación de su desempeño en los últimos 10 años del conflicto y la consiguiente derrota del plan estratégico de las FARC, definido en sus VII y VIII Conferencia.

REFERENCIAS

AGUILERA, M. (2014). *Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013 (Tercera)*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.

- ÁVILA, A. (2016). Octava Conferencia de las Farc, la más importante en la historia de la guerrilla. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/noticias/paz/octava-conferencia-de-Farc-mas-importante-historia-de-g-articulo-655756>
- CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. (s. f). El Batallón de Alta Montaña del Sumapaz. Recuperado de: <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/recorridos-por-paisajes-de-la-violencia/sumapaz.html>
- COLPRENSA. (2013). ¿Qué hace el batallón de alta montaña del Sumapaz? Recuperado de: <https://www.lapatria.com/nacional/que-hace-el-batallon-de-alta-montana-del-sumapaz-51891>
- COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN (Colombia) (Ed.). (2013). ¡Basta ya! Colombia, memorias de guerra y dignidad: Informe general (Segunda edición corregida). Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.
- DÍAZ JAIMES, J. M., & CAMILA JOHANA, A. C. (2018). El rol del Ejército frente a las amenazas tradicionales, en el contexto colombiano de cara al siglo XIX. En L. A. Montero Moncada (Ed.), *Los ejércitos y el sistema internacional contemporáneo: Nuevas amenazas, tendencias y desafíos*. Escuela Superior de Guerra.
- ECHANDÍA, C. (2001). La violencia en el conflicto armado colombiano durante los años noventa. *Revista Opera*, (1), 229–246.
- ECHANDÍA, C. (2008). El fin de la invulnerabilidad de las FARC. El estado actual del conflicto armado en Colombia. *Nueva sociedad*, (217), 4-13.
- ECHANDÍA, C., & BECHARA, E. (2006). Conducta de la guerrilla durante el gobierno Uribe Vélez: De las lógicas de control territorial a las lógicas de control estratégico. *Análisis Político*, 19(57), 31–54.
- ECHANDÍA, C., & SALAS, L. G. (2007). Dinámica espacial de las muertes violentas en Colombia. Recuperado de: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/dcart?info=link&codigo=2786595&orden=179687>
- ECHANDÍA, C. (2011). Situación actual de las FARC: Un análisis de los cambios en las estrategias y la territorialidad (1990-2011). Informes FIP 13. Recuperado de: <https://www.researchgate.net/publica->

- tion/311510113_Situacion_actual_de_las_FARC_Un_analisis_de_los_cambios_en_las_estrategias_y_la_territorialidad_1990-2011
- Economist, T. (2003). Prisoners of the FARC. Recuperado de: <https://www.economist.com/the-americas/2003/02/27/prisoners-of-the-farc>
- Economist, T. (2002a). The FARC turns the screws. Recuperado de: <https://www.economist.com/the-americas/2002/04/25/the-farc-turns-the-screws>
- Economist, T. (2002b). The FARC's moment of truth. Recuperado de: <https://www.economist.com/the-americas/2002/01/17/the-Farcs-moment-of-truth>
- Economist, T. (1998). War and Jaw. Recuperado de: <https://www.economist.com/the-americas/1998/11/12/war-and-jaw>
- EL NUEVO DÍA. (2013). Así planearon las FARC tomarse a Colombia en los 90. Recuperado de: <http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/politica/196855-asi-planearon-las-Farc-tomarse-a-colombia-en-los-90>
- EL TIEMPO. (2016). Las estrategias que marcaron el ocaso del grupo guerrillero. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/plan-colombia-y-plan-patriota-49654>
- EL TIEMPO. (2003a). Libertad 1 acorraló a las FARC. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1000445>
- EL TIEMPO. (2003b). Las FARC mueven sus fichas. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1047738>
- EL TIEMPO. (2000). *Los municipios sin policía se defienden*. Bogotá. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1212906>
- ESQUIVEL TRIANA, R. (2016). La Fuerza Aérea y el cese del conflicto colombiano (1998- 2015). *Revista Científica General José María Córdova*,14(17), 377-401.
- ESQUIVEL, R. (2019). Fuerza Aérea Colombiana y Operaciones Decisivas 1998-2015. En E. Benavidez, R. Mezú, & A. Ortiz (Eds.),

- Victorias desde el Aire. La Fuerza Aérea Colombiana y el termino del conflicto armado (4a ed., pp. 27–76). Recuperado de: https://d2r89lsluje5rg.cloudfront.net/sites/default/files/libro-victorias-desde-del-aire-2019_0.pdf
- FERNÁNDEZ DE SOTO, G. (2000). Plan Colombia: Un plan para la paz. Recuperado de: <https://www.semana.com/opinion/articulo/plan-colombia-plan-para-paz/42957-3>
- FORERO POLO, M. M., Estupiñán, C. J., Garzón, P., Pardo, L., & Pérez, C. (2017). Ejército Nacional IV División. El Conflicto Armado en las Regiones (p. 210). Bogotá: Universidad del Rosario.
- FUERZA AÉREA COLOMBIANA. (2019a). Historia de la JIN. Recuperado de: <https://www.fac.mil.co/historia-de-la-jin>
- FUERZA AÉREA COLOMBIANA (2019b). El Arpía III, insignia de la Fuerza Aérea Colombiana. Recuperado de: https://www.fac.mil.co/el-arp%C3%ADa-iii-insignia-de-la-fuerza-a%C3%A9rea-colombiana?_ga=2.39106979.1892466627.1572767996-1878256110.1572401293
- FUERZA AÉREA COLOMBIANA (2019c). Tirador escogido de plataforma aérea. Recuperado de: <https://www.fac.mil.co/tirador-escogido-de-plataforma-a%C3%A9rea>
- FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ (FIP). (2013). Dinámicas del conflicto armado en Tolima y su impacto humanitario. Bogotá.
- GALLUP. (2017). Gallup Poll No. 118. Invamer.
- GÓMEZ NIETO, Gr. R. (2018). Editorial. Recuperado de: https://publicacionesejercito.mil.co/recurso_user/revista_ejercito/Revista_195/editorial.html
- GONZÁLEZ, D. (2016). El discurso fundacional de las FARC-EP. Comunicación y Ciudadanía, 0(8), 112–119.
- HERNÁNDEZ, J. C. (2017). Fuerzas Militares Colombianas: Entre la Humillación y la Esperanza, una aproximación a la Guerra de Movimientos contra las Farc 1987-2001. Recuperado de: <http://www.congresoalacip2017.org/archivo/downloadpublic2?q=YToyOntzOjY6InBhcmF0cyY7czozNToiYToxOntzOjEwOiJJRF9BUiFVSUZPI->

jtzOjQ6IjI4MTgiO30iO3M6MToiaCI7czozMjoiZWVjYTNiNTNi-ZDRjMTIINDMxYjFhYmY5YzAyMTk1ZmMiO30%3D

- JORDÁN, J. (2014). Innovación y revolución en los asuntos militares: Una perspectiva no convencional. *Análisis GESI 10*. Recuperado de: <http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/innovación-y-revolución-en-los-asuntos-militares-una-perspectiva-no-convencional>
- LAS DOS ORILLAS. (2018). Plan Aniquilador: Cómo el Ejército retomó el control del Páramo del Sumapaz. Recuperado de: <https://especiales.las2orillas.co/canonduda/aniquilador.html>
- LEAL BUITRAGO, F. (2006). La política de seguridad democrática 2002-2005. *Análisis Político*, 2006(57), 3–30.
- LEÓN, J. (2004, septiembre). El cerco de Bogotá. *El Malpensante*, (57), 16-31.
- LOZANO, P. (1999). La guerrilla de las FARC ataca 17 localidades en toda Colombia y amenaza Bogotá. Bogotá. Recuperado de: https://elpais.com/diario/1999/07/11/internacional/931644018_850215.html
- MARTÍNEZ OSORIO, G. (Ed.). (2006). *Hablan los generales: Las grandes batallas del conflicto colombiano contadas por sus protagonistas* (1. ed). Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- MASSON, A. (2001). *Colombian State Failure: The Global Context of Eroding Domestic Authority*.
- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. (2003). *Política de Defensa y Seguridad Democrática*. Recuperado de: <https://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf>
- MOLANO J., A. (2016). Carlos Antonio Losada, el clandestino. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/carlos-antonio-losada-el-clandestino-articulo-854542>
- MORENO, C. A. (2018). Operación Libertad I. La primera fase del Plan Patriota. *Revista Ejército 195*. Recuperado de: https://publicacionesejercito.mil.co/recurso_user/revista_ejercito/Revista_195/operacion-libertad-i.html

- PASTRANA, A. (2002). Discurso del Presidente de la República. Recuperado de: <https://andrespastrana.org/apav2/portfolio-items/palabras-a-los-colombianos-del-presidente-de-la-republica-andres-pastrana/>
- PÉREZ, J. C. (2019). Usme el bastión de las FARC en la década de los 90. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/usme-el-bastion-urbano-de-las-Farc-en-la-decada-del-noventa-articulo-857582>
- POMBO, R. (1998). Ahí vienen los gringos. Recuperado de: <https://www.semana.com/opinion/articulo/ahi-vienen-los-gringos/35900-3>
- Portafolio. (2019). Los detonantes que llevaron a la peor recesión económica de Colombia. Recuperado de: <https://www.portafolio.co/economia/la-historia-de-como-colombia-cayo-en-su-peor-crisis-financiera-527409>
- PÉREZ, J. C. (2019). Usme, el bastión urbano de las Farc en la década del noventa. Recuperado de: <http://hacemosmemoria.org/2019/01/27/usme-bastion-urbano-Farc-en-los-noventa/>
- PÉREZ SALAZAR, B. (2010). Los grupos paramilitares en Bogotá y Cundinamarca, 1997-2005. *Desafíos*, 14, 238-303.
- PÉREZ SALAZAR, B., & Torres A., I. A. (2017). Los grupos paramilitares en Cundinamarca y Bogotá, 1997-2005. 1-37.
- PEÑA, L. B. (2016). Defender la capital: El aseguramiento de espacio de dependencia de Bogotá durante el gobierno de Uribe Vélez. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, 25(2), 251. Recuperado de: <https://doi.org/10.15446/rcdg.v25n2.54721>
- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (1999). Plan Colombia. Recuperado de: <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/planof.html>
- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, & MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. (2003). Política de Defensa y Seguridad Democrática. República de Colombia.
- PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH. (2001). Panorama Actual de Cundinamarca. Bogotá.

- PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH. (2002). Panorama actual de la región del Sumapaz. Bogotá: Vicepresidencia de la República de Colombia.
- PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH. (2003). Informe anual de DDHH y DIH 2003 (p. 165). Bogotá: Vicepresidencia de la República de Colombia.
- PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH. (2008). Impacto de la Política de Seguridad Democrática sobre la confrontación armada, el narcotráfico y los derechos humanos.
- RESTREPO, C. A. (2016). Consolidación de la paz y la seguridad en Colombia: Alcances de una reforma al sistema de seguridad. *Revista de Estudios en Seguridad Internacional*, 2(2), 131–156. Recuperado de: <https://doi.org/10.18847/1.4.6>
- ROJAS, J. E., PIRAQUIVE, H. E., ARANGO, D., SEQUERA, N., GUEVARA, J. I., & Pantoja, Y. C. (2017). Ejército Nacional V División. El Conflicto Armado en las Regiones (p. 135). Recuperado de: https://doi.org/10.12804/issne.2463-1941_10336.13901_difj
- RUBIO, M. (1993). FARC operan en 41 municipios de Cundinamarca. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-210720>
- RUEDA, M. I. (2000). El Plan Colombia al desnudo. Recuperado de: <https://www.semana.com/opinion/articulo/el-plan-colombia-desnudo/43517-3>
- SANABRIA, A. (2017). Séptima Conferencia, salto estratégico evolutivo 1982-1992 (C. P. Chivatá, Ed.). Recuperado de: <https://doi.org/10.25062/9789585625273>
- SEMANA, R. (1996). ¿Economía de guerra? Bogotá. Recuperado de: <https://www.semana.com/especiales/articulo/economia-de-guerra/30450-3>
- SEMANA, R. (1997a). El Proceso 8000. Bogotá. Recuperado de: <https://www.semana.com/especiales/articulo/el-proceso-8000/32798-3>
- SEMANA, R. (1997b). Novedad en el Frente. Recuperado de: <https://www.semana.com/nacion/articulo/novedad-en-el-frente/31861-3>

- SEMANA, R. (1998). Replanteamiento o Caos. Bogotá. Recuperado de: <https://www.semana.com/nacion/articulo/replanteamiento-caos/37160-3>
- SEMANA, R. (1999). En Alerta Roja. Bogotá. Recuperado de: <https://www.semana.com/nacion/articulo/en-alerta-roja/40155-3>
- SEMANA, R. (2003a). El Regreso de la Ley. Bogotá. Recuperado de: <https://www.semana.com/nacion/articulo/el-regreso-ley/62239-3>
- SEMANA, R. (2003b). La Primera Batalla Final. Recuperado de: <https://www.semana.com/nacion/articulo/la-primera-batalla-final/61819-3>
- SHIFTER, M. (1999). Colombia on the Brink: There Goes the Neighborhood. *Foreign Affairs*, 78–4. (July-August), 14–20. Recuperado de: <https://www.foreignaffairs.com/articles/colombia/1999-07-01/colombia-brink-there-goes-neighborhood>
- VÁSQUEZ, C. R. (2001). El Batallón de Alta Montaña del Sumapaz. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-521748>
- VÉLEZ, M. A. (2001). FARC – ELN: Evolución y expansión territorial. *Revista Desarrollo y Sociedad*, (47), 151-225. Recuperado de: <https://doi.org/10.13043/dys.47.4>
- Verdadabierta.com (2013). Lo que hizo las Farc en Cundinamarca. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/los-crimenes-de-las-Farc-en-cundinamarca/>
- Verdadabierta.com (2016). Las tomas de las Farc en Cundinamarca. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/las-tomas-de-las-Farc-a-cundinamarca/>